

REPÚBLICA DE COLOMBIA



SALA DE DECISIÓN LABORAL

El veinte (20) de octubre de dos mil veintitrés (2023), la SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL del TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, procede a proferir sentencia de segunda instancia, en el presente proceso ordinario laboral promovido por **MARGARITA MARÍA MONTOYA RESTREPO Y NICOLAS CORREA MONTOYA** contra la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES** (en adelante COLPENSIONES), tramitado bajo el radicado único nacional No. **05001-31-05-015-2021-00148-01**, venido a esta instancia en consulta de la sentencia de primera instancia.

AUTO

De conformidad con el memorial de sustitución de poder, allegado vía correo electrónico junto con los alegatos de conclusión de segunda instancia por parte de la sociedad RST ASOCIADOS PROJECT S.A.S. quien representa judicialmente los intereses de Colpensiones en este proceso, se procede a reconocer personería al abogado SEBASTIÁN ORREGO BETANCURT portador de la T.P. 278.334 del C. S. de la Judicatura, para que represente a COLPENSIONES en este proceso como apoderado sustituto.

El Magistrado del conocimiento, Dr. FRANCISCO ARANGO TORRES, declaró abierto el acto y previa deliberación sobre el asunto, la Sala adoptó el proyecto presentado por el ponente, el cual quedó concebido en los siguientes términos:

1. ANTECEDENTES:

Pretenden los demandantes, que se condene a COLPENSIONES a reconocerles y pagarles la pensión de sobrevivientes por el fallecimiento del señor VICENTE DE JESÚS CORREA HERNÁNDEZ, aplicando el principio de la condición más

beneficiosa estatuido en el artículo 53 de la Constitución Política Nacional, armonizado con la Sentencia SU 005 de 2018 de la Corte Constitucional y el Decreto 758 de 1990.

Pretenden el reconocimiento de la citada prestación, a partir del 06 de febrero de 2016, fecha del fallecimiento del causante, los intereses de mora establecidos en el artículo 141 de la ley 100 de 1993, de manera subsidiaria la indexación. Igualmente solicita se ordene la compensación a que haya lugar con ocasión de la indemnización sustitutiva recibida por el causante y las costas y agencias en derecho.

Como fundamento fáctico de las pretensiones, expone la demandante MARGARITA MARÍA MONTOYA RESTREPO, que contrajo matrimonio con el señor VICENTE DE JESÚS CORREA HERNÁNDEZ el 25 de julio de 1987, unión de la cual procrearon dos hijos de nombres JUAN ESTEBAN Y NICOLAS CORREA MONTOYA, ambos mayores de edad, no obstante, NICOLAS, padece enfermedad física y mental que lo limita, lo que lo hizo económicamente dependiente de su padre, máxime que la familia carece de recursos económicos.

Relata que el señor VICENTE DE JESÚS alcanzó a cotizar un total de 871 semanas en toda su vida laboral, de las cuales, más de 300 fueron aportadas antes del 01 de abril de 1994, por lo que COLPENSIONES le otorgó la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez al causante en el año 2015 por valor de \$8'715.671.

Indican los accionantes que el 06 de febrero de 2016, devino el deceso del señor VICENTE DE JESÚS CORREA HERNÁNDEZ, momento para el cual convivía con su cónyuge compartiendo techo, lecho y mesa, por lo que solicitaron a COLPENSIONES la pensión de sobrevivientes, la que les fue negada mediante Resolución SUB 246184, con el argumento que existe una incompatibilidad entre la indemnización sustitutiva recibida por el causante y la pensión de sobrevivientes reclamada.

Señalan los actores que pertenecen a un grupo de especial protección constitucional, ya que el no reconocimiento de la pensión afecta directamente la satisfacción de sus necesidades básicas, ambos dependían económicamente del causante, y que el causante trabajaba de manera independiente por días, razón por la cual no pudo continuar cotizando al sistema.

2. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA:

La oficina judicial de la primera instancia despachó desfavorablemente las pretensiones de la demanda, por considerar que, si bien el causante alcanzó a cotizar en toda su vida laboral un total de 871 semanas, la última cotización realizada data del año 1994, por lo que, al haber fallecido en el año 2016, no contaba con las 50 semanas cotizadas en los tres años anteriores al fallecimiento para dejar causado el derecho a la pensión de sobrevivientes.

De otro lado, indicó en cuanto a la aplicación del principio de la condición más beneficiosa, que la postura de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, indica que para dejar causado el derecho con una norma anterior a la ley 797 de 2003, debe haber ocurrido el deceso entre el 29 de enero de 2003 y el mismo día y mes del año 2006, no siendo el caso que nos ocupa.

En cuando a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, manifestó que dicha Corporación en sentencia SU 005 de 2018, abrió la posibilidad de aplicar normas anteriores, de manera ultractiva tales como el Decreto 758 de 1990 u otros regímenes anteriores, sin embargo, consideró que dicha postura iba en contravía de las nuevas regulaciones en materia pensional, razón por la cual consideró acogerse a la línea jurisprudencial de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema y en esa medida, no encontró cumplidos los requisitos para que los demandantes pudieran acceder a la pensión de sobrevivientes pretendida.

En contra de la anterior decisión no se interpusieron recursos, motivo por el cual, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 1149 de 2007 al haber resultado la sentencia de primer grado totalmente adversa a las pretensiones de los demandantes, se dispuso el envío del expediente ante esta Corporación judicial para surtir el grado jurisdiccional de CONSULTA en su favor.

3. DE LOS ALEGATOS EN ESTA INSTANCIA:

Corrido el traslado para alegar en esta instancia, el apoderado judicial de COLPENSIONES presentó escrito de alegatos de conclusión en los siguientes términos:

“• PREMISAS FACTICAS Y PRETENSIONES:

La señora, MARGARITA MARIA MONTOYA RESTREPO identificada con cedula 42.820.936, contrajo matrimonio por rito católico el día 27 de julio de 1987, con el señor VICENTE DE JESUS CORREA HERNANDEZ, en el templo parroquial María Madre de la Misericordia de la ciudad de Sabaneta.

Fruto de la unión matrimonial procrearon dos hijos: JUAN ESTEBAN CORRE AMONTOYA y NICOLAS CORREA MONTOYA, hoy mayores de edad. Indica la demandante que NICOLAS CORREA MONTOYA nació el 25 de noviembre de 1993 y a la presentación de la demanda tiene 27 años cumplidos, informa además que padece enfermedad física y mental que lo limitan y que no le permitió desarrollarse académicamente y en el mercado laboral, esto lo hizo dependiente económicamente de su padre.

Aduce la demandante que el señor NICOLAS CORREA MONTOYA, tiene problemas psiquiátricos, trastorno del comportamiento y la conducta desde la niñez con sintomatología psicótica asociados al consumo de sustancias psicoactivas y esquizofrénicos; por la misma sintomatología psicótica crónica esquizofrenia y heteroagresión carecen de recursos económicos para pagar una EPS en condición de aportantes, la salud familiar se financia a través del programa el SISBEN en el municipio de Envigado, la madre del señor NICOLAS CORREA MONTOYA no es pensionada, ni labora, se dedicó a los cuidados del hogar y de sus hijos.

Aduce además que el otro integrante del hogar no trabaja, ni aporta para el sustento económico del mismo, asimismo, ninguno de los actores recibe ayuda del gobierno nacional.

El causante cotizó un total de 871 semanas al ISS durante toda su vida laboral, de esas 871 semanas cotizadas en toda la vida laboral más de 300 fueron cotizadas antes del 01 abril 1994, como quiera que el señor CORREA HERNANDEZ nació a 22 de julio 1952 el mismo día y mes del año 2012 cumplió sus 60 años de edad.

Colpensiones otorgó indemnización sustitutiva de la pensión vejez al sr CORREA HERNANDEZ.

El señor difunto CORREA HERNANDEZ trabajaba en labores de ganado despostado, es decir arreglo y preparación de ganado mientras que la demandante, se dedicó siempre al cuidado de su cónyuge, hijos y hogar, por lo que no se desarrolló en el mercado laboral; de soltera solo trabajó 36 semanas.

Al causante se le había reconocido indemnización sustitutiva, la cual fue dada en resolución SUB 53630 de 27 de febrero de 2018, la demandante solicita ante Colpensiones la pensión de sobrevivientes, a través de resolución sub 246184, la entidad negó la prestación solicitada el día 12 de noviembre del 2020.

ARGUMENTACIÓN Y CONCLUSIONES FRENTE AL CASO:

De acuerdo a los hechos anteriores solicito al despacho que al momento de proferir la sentencia tenga en cuenta las excepciones propuestas con la contestación de la demanda, esto es inexistencia de la obligación, improcedencia de los intereses moratorios del artículo 141 de la ley 100 de 1993, improcedencia de la indexación de las condenas, compensación e imposibilidad de la condena en costas y prescripción.

Que de conformidad con el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, mediante la cual se modificó el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, se estableció que tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes, "...los miembros del grupo familiar del afiliado al sistema que fallezca, siempre y cuando éste hubiere cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los tres últimos años inmediatamente anteriores al fallecimiento y se acrediten las siguientes condiciones: Muerte causada por enfermedad: si es mayor de 20 años de edad, haya cotizado el veinticinco por ciento (25%) del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió veinte años de edad y la fecha del fallecimiento b) Muerte causada por accidente: si es mayor de 20 años de edad, haya cotizado el veinte por ciento (20%) del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió veinte años de edad y la fecha del fallecimiento".

Verificada la historia laboral del afiliado **CORREA HERNANDEZ VICENTE DE JESUS**, acredita cero (0) semanas cotizadas en los últimos 3 años anteriores al momento del fallecimiento, es decir entre el 6 de febrero de 2013 al 6 de febrero de 2016, no cumpliendo así con el requisito de las cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres (3) años inmediatamente anteriores al fallecimiento, razón por la cual no es procedente el reconocimiento de la prestación solicitada, bajo los parámetros establecidos en la 797 de 2003.

Toda vez que el afiliado no cumple los requisitos de la Ley 797 de 2003, para el reconocimiento de la prestación de sobrevivientes, a continuación, se verificara si le es aplicable la Condición más beneficiosa de conformidad con el concepto jurídico

BZ_2015_2404943 del 14 de diciembre de 2014, emitido por la Gerencia Nacional de Doctrina de la Vicepresidencia Jurídica y Secretaria General:

(...)"

La condición más beneficiosa también tendrá plena aplicación (i) cuando el estado de invalidez se estructura en vigor del artículo 1° de Ley 860 de 2003 y para el momento en que entró a regir este se tenían satisfechos los requisitos de la norma anterior – ley 100 de 1993 y (ii) **Cuando, tratándose de pensiones de sobrevivientes el fallecimiento ocurre en vigencia de la ley 797 de 2003, encontrándose constituidos para ese momento los requisitos que establecía la ley 100 de 1993.**

En el mismo sentido el Concepto Jurídico BZ_2015_3938339 del 20 de marzo de 2015, emitido por la Gerencia Nacional de Doctrina de la Vicepresidencia Jurídica y Secretaria General, realizo unas precisiones con respecto a la aplicación de la condición más beneficiosa a saber:

(...)"

Para que el derecho a la pensión de invalidez estructurada bajo la ley 860 de 2003 se reconocida, respecto de la densidad de semanas, con base en lo establecido en el artículo 39 de la Ley 100 de 1993 en su versión original, es necesario la observancia de las siguientes condiciones:

- **En primer lugar deberá registrar el peticionario un mínimo de 26 semanas de aportes en el último año a la entrada en vigencia del artículo 1° de la Ley 860 de 2003, que comenzó a regir a partir del 29 de diciembre de 2003 según Diario Oficial No. 45.415.**
- En segundo término, teniendo en cuenta los eventos en que el afiliado ha dejado de cotizar al sistema, deben acreditarse 26 semanas cotizadas dentro del año inmediatamente anterior a la fecha en que se produzca el estado de invalidez

Si se determina que el asegurado al momento producirse la estructuración se encontraba cotizando al régimen y demostró 26 semanas de aportes en el último año a la entrada en vigencia del artículo 1° de la Ley 860 de 2003, dicha verificación permitiría concluir automáticamente que cumple con la condición de

las 26 semanas en cualquier tiempo que exige la ley 100 de 1993. Lo mismo ocurría desde una interpretación que se realice en sentido contrario.

De conformidad con lo anterior, el fallecimiento del señor **CORREA HERNANDEZ VICENTE DE JESUS**, no se produjo entre el 29 de enero de 2003 y el 29 de enero de 2006, ni acreditó 26 semanas cotizadas, entre el 29 de enero de 2003 y el 29 de enero de 2002, razón por la cual tampoco es beneficiario de la aplicación de la Condición más beneficiosa, por lo tanto no se puede acceder a la prestación de sobrevivientes.

En el evento de que se reconozca el derecho pretendido, solicito se autorice la compensación de todas las sumas pagadas por la entidad a la demandante en caso de existir.

En caso de llegarse a acceder a la pretensión frente a los intereses moratorios, estos sólo se causan, tratándose de la pensión de vejez e invalidez, a partir del sexto mes siguiente a la presentación de la solicitud de reconocimiento pensional, y al tercer mes en los eventos que la prestación consista en pensión de sobrevivientes, de conformidad con las sentencias: T-580-03, C-1024-04 y SU-065-18.

Así mismo, el acreedor puede solicitar la indexación o los intereses moratorios, a su elección. Pero en manera alguna le es dable pretender ambas cosas al tiempo, ya que de concederse en forma simultánea la corrección monetaria y los intereses por mora, habría un enriquecimiento injusto de una de las partes, toda vez que la tasa de interés incluye el componente inflacionario, por todo lo anterior le solicito al despacho absolver a mi representada de todas las pretensiones de la demanda.”

4. PROBLEMA JURÍDICO PARA RESOLVER.

El problema jurídico a resolver en esta instancia se circunscribe a establecer, si a los demandantes, les asiste derecho al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, como consecuencia del fallecimiento de su cónyuge y padre VICENTE DE JESÚS CORREA HERNÁNDEZ.

Tramitado el proceso en legal forma y por ser competente esta Corporación Judicial para conocer de la consulta de la sentencia de primera instancia, conforme a lo

dispuesto en el artículo 14 de la Ley 1149 de 2007, se pasa a resolver, previas las siguientes:

5. CONSIDERACIONES:

A través de la presente acción judicial, la parte actora pretende se condene a COLPENSIONES a reconocerle la pensión de sobrevivientes por el fallecimiento de su cónyuge y padre VICENTE DE JESÚS CORREA HERNÁNDEZ ocurrido el 06 de febrero de 2016, pretensión que fue despachada desfavorablemente por la juez de primera instancia.

Para resolver, sea lo primero manifestar que la norma aplicable para definir el derecho que tengan los accionantes a la pensión de sobreviviente, es la vigente al momento del deceso del afiliado o pensionado, por lo que en este caso de acuerdo a la fecha del fallecimiento de la causante, esto es, **06 de febrero de 2016**, como se anota en el registro civil de defunción inserto folio 38 del archivo N°1 del expediente digital de primera instancia, las normas legales a aplicar para definir el derecho a la pensión los actores, es, el art. 12 de la Ley 797 de 2003, norma que dispone que el causante debía haber dejado acreditadas 50 semanas de cotización en los tres últimos años inmediatamente anteriores al fallecimiento, requisito éste que no se cumple en el caso de autos, toda vez que el causante realizó su última cotización al sistema pensional en octubre de 1999, según da cuenta la historia laboral adosada con la demanda entre folios 43 a 48 del archivo N°1 del expediente digital de primera instancia.

Los demandantes conscientes que no se cumple con el requisito de semanas cotizadas por el causante, que exige el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, para obtener la pensión de sobrevivientes, pretenden que se le conceda en aplicación del principio de la condición más beneficiosa.

Pues bien, la Corte Constitucional y la CSJ han desarrollado a partir del art. 53 de la Constitución Política para las pensiones de invalidez y sobrevivientes, el principio de la condición más beneficiosa, en virtud del cual se puede recurrir a normas anteriores a la vigente en la fecha de la invalidez o el deceso del causante de la pensión de sobrevivientes, que regulaba las citadas pensiones, si ellas resultan más favorables a los intereses de quien reclama la pensión frente a la vigente a la fecha del deceso del causante, pero bajo ciertos requisitos, en especial que el

causante de la pensión para el caso de la pensión de sobrevivientes, haya estado afiliado al sistema pensional en vigencia de la Ley anterior que pretende se le aplique, y haya completado igualmente en vigencia de la Ley anterior, el número de semanas que se exigían para acceder a la pensión, pues se entiende que lo que protege el principio de la condición más beneficiosa es la aplicación de unos requisitos menos gravosos para obtener el derecho pensional, que ya se había cumplido en vigencia de la Ley derogada.

Pese a lo anterior, sobre la aplicación del referido principio de la condición más beneficiosa, la Sala de Casación Laboral de la CSJ ha sido pacífica y reiterativa en que no es posible dar saltos normativos para hallar la Ley que se acomode al caso del reclamante de la pensión, pues solo es posible acudir a la norma inmediatamente anterior que regulaba el derecho a la citada prestación.

No obstante, conforme a la actual línea jurisprudencial de la SCL de la CSJ, en tratándose de pensión de sobrevivientes, para que puedan aplicarse las disposiciones de la original Ley 100 de 1993, para otorgar la citada prestación bajo el principio de la condición más beneficiosa, resulta imperioso que la muerte del causante se produzca dentro de los 3 años posteriores a la entrada en vigencia de la Ley 797 de 2003, esto es, entre el 29 de enero de 2003 y el 29 de enero de 2006, pues en caso contrario, fenece toda posibilidad de aplicar el principio de la condición más beneficiosa, requisito que no se cumple en el caso de las demandantes pues el causante falleció en el año 2016.

Por su parte, la jurisprudencia de la Corte Constitucional, venía sosteniendo que en aplicación del principio de la condición más beneficiosa era posible dar saltos normativos hasta encontrar la Ley que se adecuara a los intereses de quien pretendía la pensión en vigencia de la cual se hubiera cotizado el tiempo requerido para acceder a la pensión, sin embargo la citada Corte profirió la sentencia SU-005 de 2018, en la que, luego de realizar un análisis de las posiciones jurisprudenciales que una y otra Corte han desarrollado en los últimos años con relación al principio de la condición más beneficiosa, concluyó que la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia es el órgano judicial llamado a unificar su jurisprudencia en cuanto al alcance e interpretación de las disposiciones legales e infralegales que regulan las instituciones jurídicas del derecho ordinario que aplica, señalando además que, en tal sentido, salvo que dicha jurisprudencia sea manifiestamente inconstitucional o dé lugar al desconocimiento absoluto de una disposición

constitucional, la Corte Constitucional carece de competencia para declarar la inconstitucionalidad del derecho viviente de esa jurisdicción.

En dicha sentencia, también se indicó que el derecho viviente de la jurisdicción ordinaria laboral, en cuanto a la aplicación del principio de la condición más beneficiosa en materia de pensión de sobrevivientes, no es manifiestamente inconstitucional ni da lugar al desconocimiento absoluto de una disposición constitucional, aduciendo finalmente, que la jurisprudencia de la C. Constitucional, solo se aparta de la de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, cuando se trata de personas calificadas como **vulnerables** según el test incluido en la referida sentencia SU-005 de 2018, con unas condiciones que se deben cumplir todas, las que son las siguientes:

- Que quien pretenda la pensión, pertenezca a un grupo de especial protección constitucional o se encuentra en uno o varios supuestos de riesgo tales como analfabetismo, vejez, enfermedad, pobreza extrema, cabeza de familia o desplazamiento.
- Que la carencia del reconocimiento de la pensión de sobrevivientes que se solicita afecte directamente la satisfacción de las necesidades básicas, esto es, su mínimo vital y, en consecuencia, una vida en condiciones dignas.
- Que quien solicita la pensión dependiera económicamente del causante antes del fallecimiento de este, de tal manera que la pensión de sobreviviente sustituye el ingreso que aportaba el causante al beneficiario.
- Que el causante se encontraba en circunstancias en las cuales no le fue posible cotizar las semanas previstas en el sistema general de pensiones para adquirir la pensión de sobrevivientes.

En conclusión, la Corte Constitucional en la Sentencia SU-005 de 2018, dejó excepcionalmente abierta la posibilidad de aplicar el principio de la condición más beneficiosa, dando el salto normativo de la Ley 797 de 2003 a cualquiera Ley anterior, cumpliendo unos requisitos de un test muy estricto y preciso, uno de ellos que el afiliado fallecido en vigencia de la Ley que pretenden sus beneficiarios le sea aplicada, haya cumplido el requisito de semanas cotizadas que ella exigía, en este caso, como lo pretenden las demandantes haber cotizado más de 300 semanas cotizadas con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, requisito con el que se cumple, pues para el 01 de abril de 1994, el causante tenía cotizadas

697 semanas, con las que los demandantes eventualmente podrían acceder a la pensión de sobrevivientes si se cumplen con los demás requisitos del referido test.

Ahora, la juez de instancia solo analizó el primero de los requisitos, sin embargo, consideró que la interpretación que más se avenía al caso, era de la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, razón por la cual, descartó seguir con el análisis de los requisitos del test de procedencia estipulados por la Corte Constitucional para acceder a la pensión pretendida, por lo que la Sala verificará si los actores probaron cumplir los requisitos del test la Corte Constitucional indicado en la sentencia SU 005 de 2018, en miras a conceder el derecho que le pueda asistir a la los actores de la pensión deprecada, pues la jurisprudencia de la Corte Constitucional, debe ser aplicada a este caso.

Conforme a lo anterior, es necesario verificar si se cumplen los presupuestos del referido test, debiéndose decir desde ya, que no hay prueba en el proceso que demuestre que los demandantes lo superan, como se pasa a explicar.

En cuanto a la primera de las exigencias esto es, que los demandantes pertenezcan a un grupo de especial protección constitucional, se encuentra probado en el plenario que el joven NICOLÁS CORREA MONTOYA, tiene una Pérdida de Capacidad Laboral del 55%, es decir, que se trata de una persona con discapacidad, ello según da cuenta el dictamen emitido por COLPENSIONES en el transcurso del proceso y que obra en el archivo N°19 del expediente digital de primera instancia.

De otro lado, en cuanto a la señora MARGARITA MARÍA MONTOYA RESTREPO, ésta afirma en la demanda que acredita este requisito porque es madre cabeza de familia, pertenece a un nivel de pobreza 2 y tiene 60 años. En este caso se encuentra demostrado con el certificado del Sisben, que la actora aparece registrada como jefa de hogar, por lo que en este sentido, podría decirse que pertenece a un grupo de especial protección constitucional.

Ahora, en cuanto al segundo de los requisitos, referido a que la carencia del reconocimiento de la pensión de sobrevivientes afecte directamente la satisfacción de las necesidades básicas de los demandantes, no queda demostrado tal presupuesto, toda vez que la actora no trajo prueba testimonial para acreditar los planteamientos de la demanda, tampoco da cuenta de ello la prueba documental

obstante al plenario, pues por ejemplo el certificado del Sisben antes referido, da cuenta que al grupo familiar le fue asignado un puntaje del 84.89, lo que resulta bastante alto para las condiciones en las que dicen vivir los demandantes y si bien se acreditó con la documental que cuenta con EPS del régimen subsidiado, este solo hecho no es indicativo de que la familia no pueda satisfacer sus necesidades básicas y mínimo vital. Se itera, estas situaciones debieron ser demostradas en el proceso, pero se carece de prueba testimonial u otra idónea para su acreditación.

En lo que tiene que ver con el cumplimiento del tercer requisito, que es que quien solicita la pensión dependiera económicamente del causante antes del fallecimiento de este, de tal manera que la pensión de sobreviviente sustituye el ingreso que aportaba el causante al beneficiario, lo cierto es que dicho requisito tampoco se encuentra probado en el presente caso, porque como se acaba de indicar, no hay prueba que acredite este presupuesto.

En cuanto al cuarto requisito que dispone demostrar que el causante se encontraba en circunstancias en las cuales no le fue posible cotizar las semanas previstas en el sistema general de pensiones para adquirir la pensión de sobrevivientes, tampoco se acredita el cumplimiento de dicho requisito, pues no hay ninguna prueba que dé cuenta de las razones por las cuales el señor VICENTE DE JESUS CORREA HERNÁNDEZ, dejó de efectuar cotizaciones al sistema pensional desde el año 1999.

Finalmente, la última exigencia respecto de que la parte actora haya adelantado las solicitudes administrativas o judiciales para solicitar el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, basta ver que el causante de la pensión de sobrevivientes falleció el 06 de febrero de 2016 y la demandante MARGARITA MARÍA MONTOYA RESTREPO solicitó a COLPENSIONES dicha prestación el 25 de septiembre de 2020, tal y como se extrae de la Resolución SUB 246284 del 12 de noviembre de 2020 obrante a partir del folio 56 del archivo N°1 del expediente digital de primera instancia.

Así las cosas, a pesar que en la demanda se relata la precaria situación económica de los demandantes, y la imposibilidad del causante de seguir cotizando, la falta de prueba de tales supuestos, le imponen concluir a la Sala que los requisitos establecidos en el test de la Corte Constitucional, no fueron probados, lo que impide el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes deprecada.

Conforme a los argumentos fácticos, probatorios y de derecho expuestos en precedencia, se confirmará la sentencia de primera instancia conocida en consulta en favor de los actores.

Sin costas en esta instancia por haberse conocido el proceso en el grado jurisdiccional de consulta en favor de la parte demandante.

6. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el JUZGADO QUINCE LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN el 30 de marzo de 2022, en el presente proceso ordinario laboral promovido por **MARGARITA MARÍA MONTOYA RESTREPO Y NICOLÁS CORREA MONTOYA** contra la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES**, por las razones expuestas en la parte motiva de este fallo.

SEGUNDO: Sin costas en esta instancia.

La anterior sentencia se notifica a las partes por EDICTO.

Oportunamente devuélvase el expediente al Juzgado de origen.

No siendo otro el objeto de esta diligencia se declara culminada, y se firma por quienes en ella han intervenido, los magistrados,

Firmado Por:

Francisco Arango Torres

Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Jaime Alberto Aristizabal Gomez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

John Jairo Acosta Perez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **e668511b9538994ab02a8efc569d4ddecd96c31f3516e9af1cb2b6be2c37154b**

Documento generado en 20/10/2023 03:19:21 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>